

Introducción

LOS TRES TRABAJOS que se presentan a continuación parten de una investigación que los autores realizaron conjuntamente sobre el tema de los empresarios y la política en el periodo actual.* Aunque cada autor es responsable de lo que sostiene, los tres compartimos algunos supuestos fundamentales que subyacen en lo que se afirma en cada uno de los artículos. El propósito de esta introducción es exponer brevemente ese conjunto de supuestos.

Nuestro punto de partida es la comprobación de que desde la nacionalización bancaria se observa una presencia empresarial más notoria en el ámbito político. Aunque hay un reconocimiento generalizado de este hecho se discuten, sin embargo, los alcances del fenómeno, dando así lugar a diferentes interpretaciones.

Nosotros sostenemos que si bien no todos los rasgos del comportamiento empresarial son novedosos, sí hay importantes elementos para afirmar que se han producido cambios fundamentales en la manera en que el sector empresarial se desempeña en la escena política nacional. La hipótesis central en la que se ba-

* Véase M. Luna, R. Tirado y F. Valdés, "Los empresarios y la política en México, 1982-1986", de próxima publicación. Una versión abreviada de este artículo apareció con el título "Businessmen and politics in Mexico, 1982-1986" en S. Maxfield y R. Anzaldúa (eds.), *Government and Private Sector in Contemporary Mexico*, Monograph series 20, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987, pp. 13-43. Este trabajo se basó en una amplia revisión de fuentes hemerográficas del 1 de septiembre de 1982 a marzo de 1986. Se consultaron tanto los principales diarios nacionales como las publicaciones de las organizaciones empresariales.

san los artículos afirma que hay un nuevo protagonismo empresarial asociado a una nueva voluntad política, orientada al fortalecimiento de su presencia en la sociedad y en particular a una mayor, mejor y más explícita representación de los empresarios en el sistema político para la defensa de sus intereses, que ha puesto en cuestión algunas reglas fundamentales de ese sistema. Empíricamente, esto se puede comprobar analizando su discurso y sus estrategias de acción política, aunque aún no sea del todo posible evaluar sus consecuencias actuales y futuras.

Este fenómeno ocurre en un contexto de profundos cambios en la sociedad mexicana, los cuales se manifiestan en la agudización de los conflictos, en la activación de fuerzas y en la aparición de proyectos que han puesto en tensión las estructuras de desarrollo económico y político del país.

No es el caso repetir aquí lo que se ha tratado en una ya extensa bibliografía sobre los cambios en la sociedad mexicana durante los últimos tiempos; sólo nos interesa llamar la atención sobre dos componentes centrales de estas transformaciones que permiten situar el nuevo protagonismo empresarial. El primero alude a los desajustes del viejo pacto social, tales como el deterioro de las alianzas entre la burocracia política y los sectores empresarial y obrero, los cambios en las relaciones de poder entre diferentes sectores del grupo gobernante, la emergencia de un claro problema de legitimidad del gobierno y una creciente demanda de democratización política. El segundo se refiere a la crisis de la economía mexicana que apunta a cambios sustantivos en el patrón de acumulación inducidos por la política económica en tres grandes áreas: la intervención del Estado en la economía, la inserción de la economía mexicana en la internacional y la regulación de las relaciones entre capital y trabajo. Estos cambios han sido en gran parte determinados por las exigencias de los acreedores de la deuda externa.

Los dos componentes centrales se articulan de tal manera que configuran una situación caracterizada por un nuevo tiempo político de fluidez y transición en el que los sujetos sociales tienden a transformarse. El sector empresarial muestra claramente este proceso; desde la nacionalización de la banca, este agente ha experimentado una modificación en sus pautas de conducta política, la cual tradicionalmente estuvo condicionada por cuatro modalidades principales. La primera consistía en la exclusión del empresariado como actor político partidario legítimo del

sistema; la segunda era el reconocimiento de su derecho a otras formas de acción política: participar en la formulación de las políticas públicas e influir en la designación de los funcionarios del gobierno; la tercera radicaba en que ante esporádicas oleadas de reformismo oficial, el sector privado intervino en política de manera explícita pero sólo coyuntural y reactivamente; por último, cuando se producían estas intervenciones políticas explícitas, los empresarios mostraban más claramente su diferenciación en facciones: una radical que predominaba en las situaciones de conflicto y otra moderada cuya presencia se hacía más visible en épocas de concordia con el gobierno.

Estas modalidades del comportamiento político empresarial comenzaron a ser desbordadas a partir de los años sesenta, cuando los empresarios lograron aumentar su poderío económico, su presencia ideológico-cultural (por medio de la educación privada y de los medios de comunicación masiva), y el desarrollo de un auténtico derecho de veto contra las políticas públicas que no fueran de su agrado.

Más tarde, en los setenta, respondiendo al desgaste de la legitimidad derivado de la represión del movimiento estudiantil de 1968, a la acumulación de graves desajustes económicos y a las movilizaciones de algunos sectores populares, sobrevino el despliegue de una nueva política reformista por parte del gobierno del presidente Luis Echeverría que abrió una nueva etapa de confrontación con el gobierno, que politizó a los empresarios.

La articulación de alianzas políticas entre éstos y otros actores y fuerzas sociales (los sectores medios, el Partido Acción Nacional y la Iglesia), la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sus presiones en la sucesión presidencial y la intensa discusión sobre la pertinencia de promover una acción política propia permanentemente, mostraron que entre los empresarios estaban ocurriendo a mediados de los setenta cambios importantes en su concepción de sí mismos y de sus relaciones con la sociedad y el Estado. Sin embargo, este proceso de politización comenzó a refluir rápidamente en los años siguientes, en la medida en que la generosa política del gobierno del presidente José López Portillo hacia el sector privado y los beneficios de la abundante renta petrolera comenzaron a distender el conflicto y a devolver la perdida confianza empresarial.

La aparición de una nueva etapa de crisis económica y la nacionalización de la banca privada en septiembre de 1982 tuvie-

ron el efecto de restablecer e impulsar los cambios que el sector empresarial había iniciado en la década anterior.

Los principales efectos de la expropiación bancaria (violación de la norma de las consultas previas y el derecho de veto, desarticulación de los grupos financieros privados en sí mismos y como gestores de la política económica), así como la redefinición de la economía mixta con las reformas constitucionales del gobierno del presidente Miguel de la Madrid, generaron un protagonismo del sector privado caracterizado por un discurso y un conjunto de estrategias de acción política que manifiestan una voluntad de nuevo tipo. Esta última muestra que la facción radical ha conquistado un liderazgo mayor que en el pasado y tiende a extender su visión al conjunto del sector. Más aún, busca influir en amplios sectores de la sociedad y del Estado, así como sobrepasar los límites de la coyuntura para convertirse en un factor permanente.

Los componentes principales de este discurso son tres. El primero es la asunción de que los empresarios mismos son un agente político con derecho a un espacio legítimo en cuanto tal. El segundo consiste en una fuerte crítica al sistema político que se dirige principalmente contra el presidencialismo y el intervencionismo estatal, y reivindica la república liberal. El tercero se refiere a la convocatoria a la sociedad civil para fortalecerse frente al Estado. Cabe advertir que las críticas y demandas que contiene este discurso no son exclusivas del empresariado; de ellas participan en diversos grados y formas otras fuerzas que luchan por implantar nuevos criterios de racionalidad política. Esta es la razón por la cual las intervenciones del empresariado han adquirido una relevancia central, al avanzar en el terreno de la sociedad buscando articular nuevos consensos.

Por último, el discurso empresarial se vincula a ciertas estrategias de acción que sólo para fines analíticos —ya que en la realidad aparecen condicionadas mutuamente— hemos distinguido en tres: económico-administrativa, partidario electoral y cívico o social.

Los tres artículos que aquí se presentan profundizan en cada uno de estos tipos de estrategias.

Matilde Luna, Ricardo Tirado, Francisco Valdés

México, D.F., mayo de 1987